



RESOLUCIÓN No. 0601 10 MAYO 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En uso de las facultades legales, en especial de las conferidas por los artículos 4º, literal n) del Decreto Distrital 550 de 2006; 43 del Decreto Nacional 1469 de 2010; 1º del Decreto Distrital 191 de 2006, 69 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y el Decreto Distrital 004 del 2 de enero de 2012, tomando en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Que el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., expidió la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, *"Por la cual se aprueba el Proyecto Urbanístico de la Urbanización denominada CENTRO EMPRESARIAL Y RESIDENCIAL LOS NARANJOS, localizado en la Avenida Carrera 7 No. 180 -30/70, Alcaldía Local de Usaquén, se establecen sus normas urbanísticas y arquitectónicas, se concede licencia de urbanización y de construcción en la modalidad de obra nueva y se fijan las obligaciones a cargo del urbanizador y constructor responsable"* (folios 141 a 179).

Que el doctor Kelvin Francisco Orduz Tamayo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.217.374, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 62.175, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como Agente del Ministerio Público mediante la radicación 1-2012-15215 del 30 de marzo de 2012 solicitó ante la Secretaría Distrital de Planeación la revocatoria directa de la resolución antes referida, argumentando que (folios 193 a 197):

La Licencia de Urbanización y de Construcción RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, mediante la cual el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C, aprobó el Proyecto Urbanístico denominado Centro Empresarial y Residencial los Naranjos, localizado en la Avenida Carrera 7 No. 180 -30/70, no es procedente debido a que el referido inmueble *"se encuentra definido en el Tratamiento de Desarrollo según la clasificación de la UPZ-9 Verbenal y por tratarse de un predio urbanizable no urbanizado con un área neta urbanizable de 7,141,70 m2 (SIC) la norma urbanística a aplicar es la contenida en el Decreto 327 de 2004 "Por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico del Plan de Ordenamiento Territorial (SIC) en el Distrito Capital" en cuyo cuadro anexo No 2 para las áreas de actividad urbana integral, zona residencial, (en el cual se enmarca el predio objeto de la licencia concedida), permite los siguientes usos complementarios, siendo la vivienda el uso principal:*

Equipamientos Colectivos y recreativos de escala vecinal y zonal



Continuación de la Resolución No.

0601 10 MAYO 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

Servicios Urbanos Básicos de escala zonal

Comercio y servicios personales de escala vecinal y zonal

Servicios empresariales de escala urbana y zonal

Servicios personales de escala Urbana..."

Por lo anterior, el Ministerio Público concluye que el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., "(...) al aprobar dentro de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, (artículo 9, capítulo IV, Numeral 1,2,) los usos complementarios: servicios Empresariales de escala urbana, zonal y **Metropolitana** y los Servicios Personales de escala urbana y **Metropolitana**, infringió la norma urbanística, toda vez que estos usos no se encuentran permitidos según el cuadro Anexo No 2, que hace parte del Decreto Distrital 327 de 2004". Incurriendo así en error de hecho.

Que la Dirección de Trámites Administrativos de la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de atender la solicitud de revocatoria directa antes referida, mediante el oficio 2-2012-15295 del 4 de abril de 2012, solicitó al Curador Urbano 1 de Bogotá D.C. la remisión del expediente completo que dio origen a la expedición de la licencia urbanística otorgada para el Proyecto urbanístico de la Urbanización denominada Centro Empresarial y Residencial Los Naranjos ubicado en la Avenida Carrera 7 No. 180-30/70 de esta ciudad (folio 201).

Que el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., a través de la radicación 1-2012-17399 del 12 de abril de 2012, envió a la Secretaría Distrital de Planeación el expedite citado (folio 202).

Que una vez allegado el expediente, la Dirección de Trámites Administrativos, mediante auto del 18 de abril de 2012 avocó el conocimiento de la revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., (folios 203 y 204), disponiendo convocar al titular del acto administrativo objeto de trámite, señor Jorge Falla Lozano en su calidad de representante legal de la sociedad INCOPIMAR LTDA, con Nit 900.265.892-5 titular del Proyecto Urbanístico denominado Centro Empresarial y Residencial Los Naranjos, o a quien haga sus veces, para que dentro del término de diez (10) días, si lo consideraba pertinente se hiciera parte dentro del trámite presentando sus comentarios u observaciones y manifestando de manera expresa y por escrito, si concedía o no su consentimiento para revocar la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011.

Con el auto citado, se decidió igualmente solicitar concepto a la parte técnica, informar a la Personería de Bogotá D.C., sobre la iniciación de la actuación y poner el expediente a



Continuación de la Resolución No. 0601 10 mayo 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

disposición de los interesados, para que los mismos pudieran consultarlo, conocer los conceptos técnicos proferidos por esta entidad y, solicitar y obtener copias de las actuaciones administrativas relacionadas con el trámite.

De conformidad con lo señalado en precedencia, se expidieron las siguientes comunicaciones:

Acto Administrativo	Fecha	Destinatario
3-2012-03767	19-IV-12	Dirección de Norma Urbana (folio 205)
2-2012-17208	19-IV-12	JORGE ENRIQUE FALLA LOZANO - Gerente INCOPIMAR LTDA (folio 206)
2-2012-17209	19-IV-12	Doctor KELVIN FRANCISCO ORDUZ TAMAYO Abogado adscrito a la Personería Delegada para el Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (folio 207)

Que la Dirección de Planes Parciales de la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación, mediante el memorando 3-2012-04010 del 27 de abril de 2012, el cual forma parte integrante de la presente decisión, expidió el concepto técnico solicitado (folio 208 a 206).

Que el señor Jorge Enrique Falla Lozano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 113.290, actuando en su calidad de Gerente de la sociedad Incopimar Ltda., mediante la radicación 1-2012-19278 del 30 de abril de 2012, manifestó que se oponía a la revocatoria de la licencia de construcción otorgada mediante la Resolución 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., señalando que la licencia de construcción en mención "(...) fue revisada y aprobada nuevamente por Resolución 11-4-1735 de Septiembre 23.11 proveniente de la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá D.C.". Agrega que mediante escritura pública se ha hecho entrega de las áreas de cesión a favor del Distrito Capital, encontrándose el proyecto "(...) adelantado en un 50% y comprometido en un 60%".

Que mediante la radicación No. 1-2012-19967 del 4 de mayo de 2012, el doctor José Andrés Ríos Vega, en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D. C., con argumentos similares a los manifestados por la Personería de Bogotá D. C., solicitó ante la Secretaría Distrital de Planeación la revocatoria directa de Resolución 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C. Al respecto, manifestó (folios 224 a 232):

"Consultada la Resolución 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, se pudo establecer que el



Continuación de la Resolución No.

0 6 0 1

10 Mayo 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

Curador Urbano 1, que en su artículo 9, capítulo IV, numeral 1.2., se permiten los siguientes usos como compatibles:

Equipamientos Colectivos y Recreativos de escala Vecinal y Zonal. Servicios Urbanos Básicos de escala Zonal.

Comercio y Servicios Personales de escala Vecinal y Zonal.

Comercio Zonal.

Servicios de escala Zonal, Servicios Empresariales de escala Urbana, Zonal y Metropolitana, Servicios Personales de escala Urbana y Metropolitana, Servicios Técnicos Especializados.

*De lo anterior, se puede concluir que el Curador Urbano 1, aprobó dentro de los usos Complementarios los **Servicios Empresariales de escala Metropolitana y Servicios Personales de escala Metropolitana**, los cuales no se encuentran permitidos según el Cuadro Anexo No. 2 del Decreto 327 de 2004, lo que constituye una contravención a dichas normas.*

EL ERROR DE HECHO EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

Al haber autorizado usos compatibles de escala Metropolitana no permitidos en la norma original de la urbanización como complementarios, el Curador Urbano 1, incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas por cuanto le dio a la Resolución 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, un valor que esta no tenía, le puso a decir a la prueba algo que no decía, situación que culminó con la conversión de usos compatibles en complementarios configurándose un error en su juicio, razones que hacen procedente la solicitud de revocatoria parcial del acto administrativo de licenciamiento.

(...)

Como conclusión de todo lo anterior, la presencia de este vicio de la voluntad llevó a que el Ex Curador Urbano 1, Arquitecto Juan Reinaldo Suárez Medina, expidiera irregularmente la licencia mencionada, vulnerando las normas urbanísticas por no valorar adecuadamente las pruebas obrantes en el expediente, en este evento puntual el cuadro anexo NO. 2 del Decreto 327 de 2004, para el Área de Actividad Urbana Integral, Zona Residencia, señalando en el acto administrativo lo que objetivamente dicho cuadro no dice, valorando de forma falsa la prueba.

Así entonces, se considera que se configuró el medio ilegal por error de interpretación de las pruebas que motiva la solicitud de revocatoria directa parcial de la Licencia de Urbanismo RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, (...)"



Continuación de la Resolución No.

0 6 0 1

16 MAYO 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Competencia de la Secretaría Distrital de Planeación para avocar el conocimiento y decidir el trámite de revocatoria directa presentada contra la Resolución 11-1-2012-342 del 27 de abril de 2011, expedida por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

El artículo 69¹ del Código Contencioso Administrativo, establece que los actos administrativos se revocarán directamente por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, ya sea de oficio o a solicitud de parte.

El artículo 43 del Decreto Nacional 1469 de 2010², otorga a los curadores urbanos y a los alcaldes municipales o distritales o sus delegados, la decisión de fondo de los trámites de revocatoria directa de los actos administrativos que otorguen o nieguen licencias urbanísticas.

El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. mediante el Decreto 191 de 2006, asignó a esta entidad la competencia para conocer, tramitar y resolver, de oficio o a solicitud de parte, las revocatorias directas de los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos de Bogotá otorgan o niegan licencias urbanísticas. En consecuencia, la Secretaría Distrital de Planeación es competente para estudiar y decidir la presente actuación.

2. Oportunidad

En relación con este aspecto, el artículo 71 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 809 de 2003, establece que la revocatoria directa de los actos administrativos podrá solicitarse en cualquier tiempo. La norma en comento dispone:

“Artículo 71. Oportunidad. La revocación directa podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aún cuando se haya acudido a los tribunales

¹ “Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, ...”

² “Artículo 43. De la revocatoria directa. Al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso Administrativo con las precisiones señaladas en el presente artículo:
1. Son competentes para adelantar la revocatoria directa de las licencias, el mismo curador que expidió el acto o quien haya sido designado como tal mediante acto administrativo de manera provisional o definitiva, o el alcalde municipal o distrital o su delegado. (...)”



Continuación de la Resolución No.

0 6 0 1

10 Mayo 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda”.

3.- Acumulación.

Por razones de economía procesal y con el fin de evitar decisiones contradictorias, el despacho procede a acumular las solicitudes de revocatoria directa antes relacionadas, tomando en consideración lo siguiente:

- El inciso 1º del artículo 29 del Código Contencioso Administrativo establece que “*Cuando hubiere documentos relacionados con una misma actuación o actuaciones que tengan el mismo objeto, se hará con todos un solo expediente al cual se acumularán de oficio o a petición de interesado, cualquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad y tengan relación íntima con él para evitar decisiones contradictorias*”.
- Los escritos de revocatoria se presentaron contra el mismo acto administrativo.
- Tanto la Personería de Bogotá D. C. como la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, sustentan su solicitud con argumentos similares.

En consecuencia, se entrará a estudiar y a resolver de manera conjunta la solicitud de revocatoria directa presentada por la Personería de Bogotá D. C. y la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, contra la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

4. Problema jurídico.

Según los argumentos planteados por el Ministerio Público y la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, le corresponde a este despacho determinar si hay lugar a la revocatoria de la Licencia de Urbanización y de Construcción otorgada por el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., mediante la RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011.

Para dar respuesta a lo anterior, se hará un análisis de la revocatoria directa de los actos administrativos, seguidamente se establecerá si tal como afirman la Personería de Bogotá D. C. y la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, la licencia citada infringe la norma urbanística al aprobar usos que no se encuentran permitidos para el predio en particular.

Finalmente, se estudiará el argumento del error de hecho alegado por las citadas entidades de



Continuación de la Resolución No.

0 6 0 1

10 Mayo 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

control, para determinar si procede o no la revocatoria directa.

5. El caso concreto

5.1. Análisis sobre la revocatoria directa de las licencias urbanísticas

El Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, consagra en su Título V la figura jurídica de la revocatoria directa, como un mecanismo que permite a la propia administración, de oficio o a solicitud de parte, la revisión de sus propios actos.

En el artículo 69 de la referida norma, se enuncian de manera taxativa las causales por las cuales pueden ser revocados los actos administrativos, así:

“(…)

ARTÍCULO 69. *Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:*

1. *Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
2. *Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
3. *Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.*

(…)”

Se constituye así la revocatoria directa, como una prerrogativa de la administración para volver sobre sus propios actos y retirarlos del mundo jurídico, si se presenta alguna de las causales anteriormente enunciadas.

En palabras de la Corte Constitucional, la revocabilidad es una de las características propias del acto administrativo, que se traduce en la potestad de la administración para revisar y volver a decidir sobre las cuestiones o asuntos sobre los cuales ha adoptado una decisión invocando razones de legalidad o legitimidad, con miras a asegurar el principio de legalidad, o la oportunidad, el mérito o conveniencia de la medida que garanticen la satisfacción y prevalencia del interés público o social. Cuando se trate de actos de contenido general es admisible su revocabilidad por la administración, sin ninguna limitación, mediante la invocación de las aludidas causales. En cambio, los actos administrativos que reconocen un derecho subjetivo o una situación jurídica particular y concreta en favor de una persona no son revocables sino con el



Continuación de la Resolución No. 0601 16 MAYO 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

consentimiento escrito y expreso del titular del derecho³.

Es una consagración del principio de inmutabilidad de los actos administrativos de carácter particular y concreto, que ya se encontraba presente en el artículo 21 del Decreto 2733 de 1959, el artículo 73 del C.C.A. establece límites a la potestad revocatoria de la administración, supeditándola a la existencia del consentimiento escrito y expreso de su respectivo titular. Disponiendo, no obstante la norma en comento, dos excepciones a la intangibilidad de esta clase especial de actos, habilitando a la administración para revocarlos unilateralmente, aún cuando no medie el consentimiento escrito y expreso del titular, cuando los mismos resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69 o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

En este último caso la Jurisprudencia Constitucional trató el tema en la Sentencia T-215 de 2006 cuyo argumento es del siguiente tenor:

“Es claro que no se trata de situaciones en las cuales la autoridad pública pueda intuir o sospechar la ilegalidad de los medios usados para obtener o provocar el acto administrativo que se revoca. Debe darse una evidencia de ello y, en consecuencia, la motivación del acto revocatorio dejará constancia expresa acerca de los elementos de juicio que llevaron al ente administrativo a concluirlo así”.

En otra Sentencia⁴, la Corte Constitucional explicó que, “El ordenamiento jurídico colombiano contempla dos (2) excepciones a la regla prescrita en el numeral (i) es decir, hipótesis en las cuales puede darse una revocatoria directa constitucional sin consentimiento del administrado: a) cuando la situación subjetiva consolidada fue producto del silencio administrativo positivo. b) cuando fue producto de maniobras evidente y probadamente fraudulentas, violando la Constitución y la ley. Del punto b), es posible inferir que la ilegalidad que generó el nacimiento a la vida jurídica del derecho subjetivo no puede presumirse, y que la revocatoria directa no puede fungir como medida cautelar ante la mera sospecha de fraude”

Así las cosas, el artículo 73⁵ del C. C. A. expresa que los actos administrativos que tengan efectos particulares y concretos, no pueden ser revocados, sin contar con el consentimiento expreso y escrito de sus titulares; sin embargo, el inciso segundo del citado artículo, por excepción, prevé esa posibilidad sin el precitado beneplácito, en los siguientes eventos:

³ Corte Constitucional, SENTENCIA T-347/94, 3 de agosto de 1994.

⁴ Sentencia T-723 de 2008

⁵ “ARTÍCULO 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.” (Negritas y subrayas fuera de texto).



0601-16 MAYO 2012

Continuación de la Resolución No.

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

- Cuando resulte de la aplicación del silencio administrativo positivo⁶, si se dan las causales previstas en el artículo 69⁷ del C. C. A.
- **Si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.**

En relación con las excepciones consagradas en el inciso segundo del artículo 73 del C.C.A, la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado mediante sentencia de interés jurídico⁸, expresó:

“(…)

La interpretación que hizo la Sala del artículo 73 del C. C. A. sólo contempló la posibilidad que tienen las autoridades de revocar los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento del particular, cuando se derive del silencio administrativo positivo, planteamiento que revisa la sala en esta oportunidad, pues una nueva lectura del citado artículo 73 del decreto 01 de 1984 permite ampliar el alcance que otrora señaló esta corporación y llegar a una conclusión diferente.

(…)

Nótese que en el inciso 2º de dicha norma, el legislador empleó una proposición disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la puntuación de su texto. Pero además como se observa en este mismo inciso 2º y en el 3º, el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión “actos administrativos”, para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna.

Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales.

⁶ Previsto en el artículo 41 del C. C. A.: “**ARTÍCULO 41.** Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. ... Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir del día en que se inició la actuación. ... El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las condiciones que señalan los artículos 71, 73 y 74.” (Negrillas y subrayas fuera de texto)

⁷ “**ARTÍCULO 69.** Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: ... 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. ... 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. ... 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”

⁸ Consejo de Estado - Consejero Ponente Dra.: ANA MARGARITA OLAYA FORERO - Fecha: Julio 16 de 2002- No. de Rad.: UJ-029-02.



Continuación de la Resolución No. 0601 16 Mayo 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del C.C.A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la ley.

La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de responsabilidad para su acatamiento.

(...)

Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, éste debe provenir de una causa eficiente, como quiera que si esa causa no es eficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El medio pues tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su consentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por esa vía es por lo que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal acto, sin consentimiento del particular afectado, previa la tramitación del procedimiento señalado en el artículo 74 del C.C.A...).

De la lectura del extracto transcrito, puede inferirse que es claro que aunque nuestra legislación consagra el principio de inmutabilidad de los actos de contenido particular y concreto, la administración ostenta la facultad de retirar del ordenamiento jurídico dichos actos sin el consentimiento escrito y expreso de su respectivo titular, restringida estrictamente a la ocurrencia de los dos (2) eventos mencionados anteriormente.

De otra parte, la Corte Constitucional en las sentencias T-494/09 del 23 de julio de 2009 y T-949/10 del 25 de noviembre de 2010, señaló:

“En lo que concierne a la revocatoria o suspensión unilateral de un acto administrativo particular y concreto, la Corte ha señalado que, por regla general, sólo se puede efectuar con el consentimiento expreso del titular, excepto en los casos en los que se compruebe una manifiesta ilegalidad, situación extraordinaria que busca proteger el interés público, donde lo que se debe agotar es el procedimiento establecido en el artículo 74 del Código

Q



Continuación de la Resolución No.

0601 10 MAY 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

Contencioso Administrativo⁹ e iniciar las acciones fiscales, judiciales, penales y disciplinarias pertinentes, en procura de la restitución de los recursos y la imposición de las sanciones que corresponda, ante las actuaciones ilícitas.

(...)

En la misma sentencia (C-835 de 2003) se estableció, además, que cuando se deba revocar el correspondiente acto administrativo, “será necesario el consentimiento expreso y escrito del titular, y en su defecto, el de sus causahabientes. De no lograrse este consentimiento, la entidad emisora del acto en cuestión deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pues: ‘razones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona, como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo’.

Igualmente, en esa misma providencia se expresó que basta con la tipificación de la conducta como delito para que la administración pueda revocar, aunque no se den los otros elementos de la responsabilidad penal; por consiguiente, como se trata de una circunstancia de ostensible ilegalidad, “la aplicación del principio de buena fe deberá operar es en beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias”.

(...)

*Frente a lo anterior, es importante aclarar, como se refirió en precedencia, que por regla general, para revocar un acto administrativo de forma unilateral se necesita el previo consentimiento expreso del involucrado, excepto en los casos en los que exista **manifiesta ilegalidad**.*

En la precitada sentencia T-776 de 2008, fueron contempladas tres diferentes situaciones: “(i) la Administración tendrá la facultad de revocar su propio acto aún sin consentimiento del beneficiario, siempre que se agote como mínimo el procedimiento previsto en los artículos 14, 28, 34, 35 y 74 del Código Contencioso Administrativo y que se identifiquen en la conformación del acto administrativo censurado conductas tipificadas en la ley penal, ‘aunque no se den los otros elementos de la responsabilidad penal’ ; (ii) se podrá revocar unilateralmente el acto propio cuando éste sea fruto de silencio administrativo positivo de acuerdo al artículo 73 del Código Contencioso Administrativo; (iii) la Administración

⁹ Cfr. T-376 de agosto 21 de 1996, M. P. Hernando Herrera Vergara; T-639 de noviembre 22 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-336 de julio 15 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo; C-672 de junio 28 de 2001, M. P. Álvaro Tafur Galvis y C-835 de septiembre 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería.



Continuación de la Resolución No.

0 6 0 1 1 6 MAYO 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

deberá acudir directa e indefectiblemente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo si no identifican en el acto que las irregularidades o anomalías constituyen conductas tipificadas en la ley penal."

Así las cosas, de acuerdo con lo explicado por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, por ser una excepción, la regla de revocatoria sin consentimiento de actos particulares debe interpretarse de forma restrictiva, y en consecuencia no puede aplicarse con base en sospechas, sino que es necesario "(...) que se identifiquen en la conformación del acto administrativo censurado conductas tipificadas en la ley penal"¹⁰, o que se trate de "...una abrupta, abierta e incontrovertible actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada cuya persistencia implique grave y actual quebranto al orden jurídico"¹¹

Significa lo expuesto que, la administración solamente puede revocar un acto administrativo sin el consentimiento expreso y escrito del titular de los derechos de carácter particular y concreto reconocidos en él, cuando del estudio de la actuación administrativa se infiera sin lugar a dudas que la expedición del acto ocurrió por alguno de los vicios de la voluntad, esto es, error, fuerza o dolo, bien que recaiga sobre el objeto de la actuación o respecto de cualquiera de los sujetos que en ella intervinieron.

5.2 De la presunta vulneración de la norma urbana

El doctor Kelvin Francisco Orduz Tamayo como Agente del Ministerio Público y el doctor José Andrés Ríos Vega, en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D. C., en sus escritos de solicitud de revocatoria directa señalan que el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C. infringió la normativa urbanística al expedir la RES 11-1-0342 del 27 de Abril de 2011, debido a que autorizó como usos complementarios los de "Servicios Empresariales de Escala Urbana, zonal y **Metropolitana**, Servicios Personales de Escala Urbana y **Metropolitana**", los cuales no están permitidos para el predio de la Avenida Carrera 7 N°. 180 -30/70, ya que que el referido inmueble, "(...) se encuentra definido en el Tratamiento de Desarrollo según la clasificación de la UPZ-9 Verbenal y por tratarse de un predio urbanizable no urbanizado con un área neta urbanizable de 7,141,70 m2 la norma urbanística a aplicar es la contenida en el Decreto 327 de 2004" y, el referido decreto, en el cuadro anexo No 2, no contempla el uso asignado en la resolución mencionada, para las áreas de actividad urbana integral, zona residencial, donde se ubica el predio objeto de estudio.

La parte técnica al estudiar los planteamientos del Ministerio Público¹², mediante el memorando

¹⁰ Sentencia T-949 de 2010

¹¹ Sentencia T-215 de 2006

¹² Los cuales, como se indico en precedencia, son similares a los expuestos por la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá.



Continuación de la Resolución No.

0 6 0 1

10 MAYO 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

3-2012-04010 del 27 de abril de 2012, concluyó:

*“Del análisis de los argumentos, hechos y consideraciones del Ministerio Público es evidente que la conclusión del error cometido por el Curador Urbano es acertada, ya que los usos complementarios de Servicios Empresariales de escala **Metropolitana** y los Servicios Personales de escala **Metropolitana** incluidos en la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, (artículo 9, capítulo IV, Numeral 1,2,), en efecto, no los contempla el cuadro No 2 anexo al Decreto Distrital 327 de 2004, para el Área de Actividad Urbana Integral, Zona Residencial, zonificación asignada al sector normativo 1, área donde se localiza el proyecto, según la UPZ No. 9 Verbenal, adoptada con el Decreto Distrital 354 del 4 de septiembre de 2006.*

*No obstante es de aclarar, que si bien de manera general la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011 contempló los usos de Servicios Empresariales de escala **Metropolitana** y los Servicios Personales de Escala **Metropolitana**, no permitidos por la normatividad contenida en el Decreto Distrital 327 de 2004, reglamentarios del Decreto Distrital 190 de 2004, compilado del POT, la resolución emitida por el Curador Urbano aprobó el proyecto arquitectónico en el artículo 11 especificando usos dentro de los cuales no aprobó (Sic) de Servicios Empresariales de escala **Metropolitana** y los Servicios Personales de Escala **Metropolitana**”.*

En relación con el tema, debe tenerse en cuenta que mediante la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011 el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., otorgó en forma simultánea para el predio de la Avenida Carrera 7 No. 180 -30/70, licencia de urbanización y licencia de construcción y, en el artículo 9, numeral 1.2. de la Resolución señaló entre los usos complementarios (folios 156 y 157):

“SERVICIOS DE ESCALA ZONAL, SERVICIOS EMPRESARIALES DE ESCALA URBANA, ZONAL Y METROPOLITANA, SERVICIOS PERSONALES DE ESCALA URBANA Y METROPOLITANA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

Intensidad: Hata 35% del área útil del desarrollo urbanístico.

Funcionamiento: En edificaciones diseñadas y construidas para el uso, con destinación única o en establecimientos de comercio zonal, urbano o metropolitano”.

Esto, en contravención con lo dispuesto en la norma urbanística, según quedó establecido en el concepto técnico.

No obstante lo anterior, el proyecto arquitectónico, aprobado mediante el artículo 11 de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, no contempló el desarrollo de los usos atrás



Continuación de la Resolución No.

0 6 0 1

10 MAYO 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

referidos, ya que en éste se estableció (folios 170 y 171):

“ARTÍCULO 11º PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Aprobar el proyecto de construcción del proyecto localizado en el superlote único de la urbanización CENTRO EMPRESARIAL Y RESIDENCIAL LOS NARANJOS proyecto que consta de dos torres TORRE A y TORRE B:

La totalidad del proyecto arquitectónico se aprueba con las siguientes áreas:

(...)

TORRE A:

Edificación en siete pisos de altura y sótano. Con destinación del primer piso a Comercio de Escala Zonal y del segundo piso al séptimo a Servicios Profesionales Técnicos Especializados de Escala Zonal (oficinas)

(...)

TORRE B:

Edificación en siete pisos de altura y sótano con destinación del primer piso a equipamiento comunal y estacionamientos, para siete unidades de vivienda (VIS) y 21 unidades de vivienda (NO VIS)

(...)”.

Como puede apreciarse, la totalidad el proyecto arquitectónico fue aprobado sin la inclusión de los usos cuestionados, por lo que, en relación con este aspecto no se presenta incumplimiento de la norma urbanística.

En consecuencia, aun cuando de manera general en la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011 se incluyeron los usos no permitidos mencionados por el Ministerio Público y por la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, estos usos no fueron solicitados o autorizados en la licencia de construcción aprobada con la misma resolución. Por tanto, el incumplimiento señalado por la Personería de Bogotá D.C. y por la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, no afecta lo autorizado en el proyecto arquitectónico, el cual se encuentra “(...) adelantado en un 50% y comprometido en un 60%”, según informa el señor Jorge Enrique Falla Lozano en su calidad de Gerente de la sociedad Incopimar Ltda.



Continuación de la Resolución No. 0601 16 MAYO 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

Así las cosas, si bien, no se presenta incumplimiento urbanístico respecto del uso aprobado en la licencia de construcción objeto de la actuación, en relación con los usos complementarios, se inobservaron las disposiciones urbanísticas que les eran aplicables. En consecuencia, desde este punto de vista, asiste razón a los entes de control cuando señalan la inconsistencia anotada.

5.3 Del supuesto error de hecho

En el presente caso, tanto la Personería de Bogotá D. C. como la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá, manifiestan que se incurrió en un error de hecho por parte del entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., al aprobar mediante la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, unos usos complementarios no permitidos en la norma urbanística aplicable al sector donde se ubica el predio objeto de la actuación.

Para dar respuesta al anterior argumento es necesario precisar, que entre los vicios de la voluntad en la celebración de los actos jurídicos se encuentra el error, que significa conocer algo, pero de manera falsa. Además, se debe aclarar, que cuando el error o la ignorancia afectan algún elemento del acto jurídico o las condiciones o circunstancias en que se lleva a cabo éste, hablamos de error de hecho, a diferencia del error de derecho, que recae sobre la interpretación de normas jurídicas que se aplican al caso concreto.

El error de hecho se puede dar en la apreciación de las pruebas, cuando el juzgador no le da el valor que tiene una prueba o se equivoca en su valoración, en todo caso, el mismo debe estar debidamente probado, pues la sola manifestación de su existencia no es motivo suficiente para concluir que existió un medio ilegal.

En efecto, el ordenamiento positivo exige que la manifestación de voluntad de las personas que producen un acto jurídico sea consciente y libre, esto es, que no esté afectada por irregularidades que, genéricamente, la ley y en la doctrina denominan vicios del consentimiento, esto es, error, fuerza y dolo (Art. 1508 del Código Civil). La fuerza o violencia es la presión física o moral que se ejerce sobre una persona para obtener su consentimiento, la cual infunde miedo o temor en la misma. El dolo es toda especie de artificio para engañar a otro sujeto del negocio jurídico y que induce o provoca un error en él. El error, por su parte, consiste en la falta de correspondencia entre la representación mental del sujeto y la realidad, es decir, en el conocimiento no verdadero o falso de la realidad. Se distingue de la ignorancia, en cuanto ésta consiste en la ausencia de conocimiento.

Para los efectos de este examen interesa en particular definir el error de hecho. En relación con



Continuación de la Resolución No.

0 6 0 1

1 6 MAYO 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

este tipo de error la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia dice que se incurre en error de hecho “cuando se desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, bien porque se supone el medio inexistente, se pretermite el existente o se le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido objetivo, alterándolo”

La jurisprudencia del Consejo de Estado¹³ también se ha pronunciado al respecto, así:

“En efecto, recuérdese que al quebrantamiento de las normas de derecho sustancial puede llegarse por dos vías diferentes: la directa y la indirecta; la primera cuando con independencia de la prueba, el juzgador al dictar sentencia, infringe la norma por falta de aplicación, por indebida aplicación o por interpretación errónea; al paso que en la segunda incurre en esa violación por errores en relación con las pruebas producidas en el proceso para acreditar las circunstancias fácticas relevantes del litigio, bien por error de hecho evidente o manifiesto o bien por error de derecho.”¹⁴

Suficientemente se encuentra decantado en la jurisprudencia que el error probatorio de hecho ocurre cuando el Tribunal cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio probatorio en el proceso o cuando al existente le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido real, es decir, cuando desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, en cuanto la omitió, ignoró o creyó que existía o al apreciarla distorsionó la situación fáctica”¹⁵

Como lo establece la jurisprudencia, el error de hecho hace referencia a la valoración probatoria; nótese que se produce cuando se ignora una prueba que se encuentra de forma válida en el proceso o se supone como existente una que no ha sido incorporada, (*falso juicio de existencia*), o cuando distorsiona o tergiversa su contenido fáctico atribuyéndole efectos que no se derivan de ella (*falso juicio de identidad*).

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejera Ponente, Ruth Stella Correa Palacio. Fecha, 16 de junio de 2008. Radicación 11001-03-26-000-2007-00061-00 (34543). Actor: Teleacceso S.A. en liquidación. Demandado, Colombia Móvil S.A. ESP.

¹⁴ En cuanto al error de hecho y error de derecho en general, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil: Sentencia N° 065 de fecha 13 de julio de 1995; Sentencia N° 34 de fecha 10 de agosto de 1999; Sentencia N° 035 de fecha 17 de agosto de 1999; Sentencia N° 111 de fecha 1° de diciembre de 1999; Sentencia de fecha 19 de octubre de 2000; exp. 5442; Sentencia de fecha 23 de febrero de 2001, exp. 5619. Respecto de error de hecho: Sentencia N° 06 de fecha 12 de febrero de 1998; Sentencia N° 04 de fecha 11 de marzo de 1999; Sentencia de fecha 14 de febrero de 2001; exp. 6347; Sentencia de fecha 23 de febrero de 2001, exp. 6399; Sentencia de fecha 21 de mayo de 2001; exp. 5924; Sentencia de fecha 15 de marzo de 2001 exp. 6142; Sentencia N° 80 de fecha 18 de septiembre de 1998; Sentencia N° 90 de fecha 22 de octubre de 1998; Sentencia N° 006 de fecha 12 de febrero de 1998; Sentencia N° 11 de fecha 3 de marzo de 1998; Sentencia N° 80 de fecha 18 de septiembre de 1998; Sentencia N° 28 de fecha 27 de julio de 1999; Sentencia de fecha 14 de mayo de 2001; exp. 6752; Sentencia de fecha 14 de mayo de 2001; exp. 6752; Sentencia de fecha 15 de septiembre de 1993, reiterada en sentencia de junio 28 de 2000, exp.: 5430; Sentencia de fecha 27 de marzo de 2001; exp. 5676; Sentencia de fecha 2 de febrero de 2001; exp. 5670. Y Sobre error de derecho: Auto No.307 de 25 de noviembre de 1997; Sentencia No. 009 de 22 de abril de 1997; Sentencia N° 019 de fecha 8 de junio de 1999; Sentencia 28 del 11 de noviembre de 1999, entre otras.

¹⁵ Vid. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia N° 34 de 10 de agosto de 1999.



Continuación de la Resolución No.

0 6 0 1

16 MAYO 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

Para el caso concreto, conforme a lo expresado en punto anterior, en la actuación, se observa que se presentó una trasgresión a la normativa urbanística, al inobservar el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., las disposiciones a las cuales debía someter la actuación; sin embargo, dicha situación se enmarca en una ilegalidad, y no en un medio ilegal como quiera que este despacho no tiene los fundamentos suficientes para determinar la utilización de los mismos en la producción del acto administrativo objeto de estudio, y en esa medida, no es acertado señalar como afirma el Ministerio Público que existió un error de hecho al no aplicar la normativa referida. Adicionalmente, se puede verificar que la inconsistencia en que incurrió el curador urbano corresponde a una falta en la valoración de las normas aplicables al caso y no de las pruebas que sustentaron la expedición de la licencia. Se produjo entonces más que un error de hecho, uno de derecho relativo a la valoración del texto legal que soportó la decisión.

Así, de la revisión del expediente y de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia y doctrina referida, se establece que el entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., al no observar la normativa aplicable al caso concreto, incurrió en una trasgresión a la misma, sin que ello signifique que tal situación se haya generado por un error de hecho, pues pese a que se evidenció el desconocimiento de las disposiciones a las cuales debía someterse, no es posible afirmar o deducir que el referido acto administrativo sea producto o resultado de la ocurrencia de un acto ilícito que haya influido en la libre manifestación del entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C. de la ciudad, requisito señalado en el inciso 2º del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, para revocar directamente los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento expreso y escrito del titular, el cual, en el caso que nos ocupa fue negado de manera expresa y escrita por el señor Jorge Falla Lozano en su calidad de Gerente de la sociedad Incopimar Ltda., mediante la radicación 1-2012-19278 del 30 de abril de 2012 (folio 211).

No sobra señalar que el error en la valoración de la prueba por parte del curador urbano no tuvo en el caso como consecuencia una transgresión real del orden legal, pues como se indicó anteriormente el proyecto arquitectónico aprobado no vulnera la normatividad urbanística en cuanto aprueba un uso permitido, a pesar que de manera general previó uno que no lo era.

De esta forma, el incumplimiento de la normativa urbanística en que se incurrió al expedirse la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, por parte del entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., se encuadra en la causal primera del artículo 69 del C.C.A., y no en la última parte del inciso segundo del artículo 73 del C.C.A. Por tanto, conforme a los lineamientos señalados



0 6 0 1

16 MAYO 2012

Continuación de la Resolución No.

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

en la Sentencia de Interés Jurídico IJ-029-2002¹⁶ proferida por el Consejo de Estado, la referida resolución no puede ser objeto de revocatoria directa. Por lo tanto, esta Secretaría se abstendrá de revocar el referido acto administrativo.

En conclusión, en aplicación de las normas citadas y de la jurisprudencia transcrita, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en el presente caso no se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 73 del C.C.A. para la revocación de un acto administrativo de carácter particular y concreto, especialmente por cuanto no se cuenta con el consentimiento del titular, por lo que no se accederá a la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por entonces Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., presentada por la Personería de Bogotá D. C. y por la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá.

En mérito de lo expuesto,

¹⁶ En el mismo sentido, la Sentencia de Interés Jurídico IJ – 029 – 02 del 16 de julio de 2002, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero, expresa:

“(…)

Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del C. A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la ley.

La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de responsabilidad para su acatamiento.

(…)

Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, éste debe provenir de una causa eficiente, como quiera que si esa causa no es eficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El medio pues tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su consentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por esa vía es por lo que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal acto, sin consentimiento del particular afectado, previa la tramitación del procedimiento señalado en el artículo 74 del C.C.A.

(…)”



Continuación de la Resolución No.

0 6 0 1

16 MAYO 2012

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa de la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C.

RESUELVE

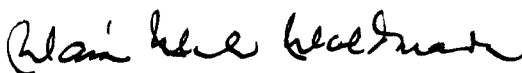
ARTÍCULO 1º. No revocar la Resolución RES 11-1-0342 del 27 de abril de 2011, expedida por el Curador Urbano 1 de Bogotá D.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º. Notificar el contenido de esta decisión al doctor Kelvin Francisco Orduz Tamayo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.217.374, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 62.175, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en su condición de Agente del Ministerio Público, al doctor José Andrés Ríos Vega, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas de Bogotá D. C. y, al señor Jorge Enrique Falla Lozano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 113.290 como representante legal de la sociedad Incopimar Ltda., titular de la resolución objeto de la solicitud e revocatoria directa, indicándoles que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO 3º. En firme el presente acto administrativo, devolver el expediente a la Curaduría Urbana 1 de Bogotá D.C. .

Dada en Bogotá D.C., a los 16 MAYO 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


MARIA MERCEDES MALDONADO COPELLO
Secretaria Distrital de Planeación

Aprobó: Diego Isaias Peña Porras. Subsecretario Jurídico.
Revisó: Adriana del Pilar Vergara Sánchez. Directora de Trámites Administrativos.
Proyectó: Juan de Jesús Vega F. Profesional Especializado.

7-V-12.